

La policía del “mallku”

La tranquilidad en Achacachi es pura apariencia. Desde el 2000, la población más aguerrida del país no acepta el ingreso de la Policía en su territorio; más de 60 mil pobladores viven a merced del autoritarismo de sus líderes. A los constantes rumores de asentamiento y entrenamiento de grupos irregulares cerca de las cumbres, se suma el nuevo “proyecto” de Felipe Quispe: la “policía india”. En medio de la efervescencia del Omasuyos, el gobierno asegura que no está enterado de nada.

Por Miguel Gómez Balboa

No existe ningún lugar en la República donde no se ejerza el poder policial”, afirmó rotundamente el viceministro de Régimen Interior, José Luis Harb. Para desaire del gobierno, esto es falso. Y si quedan dudas, lo corrobora el comandante departamental de la Policía, Guido Arandia, quien afirma que, sin garantías, la Policía no ingresará a Achacachi.

A tres años de ausencia en ese territorio, Arandia expresa que las fuerzas del orden tampoco han regresado a las comunidades aledañas a la población de Achacachi desde los traumáticos sucesos de 2000. Ese tema, dice, debe ser tratado por el Prefecto y el Comandante General. Para Arandia, la falta de seguridad imperante en la provincia no es broma. “No se puede volver así nomás, porque en cualquier momento la gente de ahí bebe y puede atacar contra nosotros de nuevo”.

El temor de la Policía no es gratuito, pero Harb insiste en que podría realizar una conferencia de prensa en la plaza de Achacachi, si es necesario. A noventa kilómetros de la urbe paceña, la realidad está muy distante de los deseos del Viceministro; las principales autoridades achacacheñas

En los alrededores de Achacachi, el nacionalismo aymara es un discurso recurrente

y los habitantes de la tradicional “Rinconada” —compuesta por pequeñas comunidades cercanas a Achacachi— están convencidas de la innecesaria presencia de las fuerzas policiales.

Ni siquiera los reclamos del pueblo achacacheño y de Warisata —preocupados seriamente por la proliferación de pandillas y de bares en su territorio— pueden hacer frente a la terquedad de sus líderes. Ante la ausencia de la ley, las peleas, riñas, robos y violaciones han pasado a ser objeto de juzgamiento interno, recurriendo incluso a los comités cívicos y juntas vecinales para poner orden en medio del caos. En casos extremos (de homicidio, por ejemplo), señalan, sólo les queda recurrir a la Fiscalía de Huarina.

“Nosotros sabemos que en una encuesta realizada en Achacachi hace dos meses, la mayoría de los pobladores pidieron el retorno de la Policía, pero hasta el momento no nos han dicho nada sobre el regreso al pueblo, a pesar de esto, cuando es necesario entramos en comisión con la Fiscalía, pero previamente pedimos garantías a las autoridades comunitarias”, comenta el capitán Jesús Torricos de la Policía de Huarina.

El pedido de los afligidos comunarios de Achacachi poco parece importar al Alcalde. Francisco Quispe tiene otra visión del problema. Para él, la presencia policial “no es necesaria”; esta institución —asegura— perdió credibilidad debido a su comportamiento en la provincia. La corrupción y el desinterés por la población son los argumentos esenciales de la decisión provincial de no contar con el organismo del orden. “No los estamos

extrañando (a los policías); gracias a nuestra organización hasta el momento no hemos tenido muchos problemas”, sostiene Quispe.

Con asumida omnipotencia, el Alcalde declara, además, que sólo aceptará el retorno de la Policía cuando ésta cambie de mentalidad y “deje de ser déspota con su pueblo”, y en el afán de lograr su cometido, Quispe improvisa: “Para controlar la delincuencia y la afluencia de bares estamos coordinando con todas las instituciones vivas, como las juntas vecinales y el Comité Cívico”.

Sintomáticamente, lo expresado por Quispe no coincide con la petición de los pobladores, que claman por el retorno policial ante la inminente debacle de la seguridad achacacheña. “Con los acontecimientos últimos, la población y los dirigentes están alarmados porque hay bastante violencia, pandillas, asaltantes, cantinas, y queremos frenar todo esto; por eso estamos conversando para traer a la Policía nuevamente a Achacachi, los únicos que se oponen son los campesinos de la ‘Rinconada’, el ‘Mallku’ y los dirigentes”, denuncia el presidente del Comité Cívico, Tito Chambi.

La Republiqueta del MIP

Resulta insólito, pero prescindir de la Policía es uno de los pocos puntos en común entre los principales representantes del campesinado omasuyense en el gobierno: Felipe Quispe y Germán “Inca” Choquehuanca.

La presencia policial está por demás al no adecuarse a la “cosmovisión andina que busca una seguridad autárquica en base al control y la seguridad comunitaria”, sostienen.

Choquehuanca asume, por su lado, que el papel de la Policía ha sido cubierto por las autoridades indígenas, y que con los “pacos” fuera de la circunscripción provincial se ha reducido la violencia. La realidad campesina es diferente, dice el “Inca”, olvidando por completo lo que demanda la Carta Magna.

Es más, el antagonista del “Mallku” expresa sin rubor que desde el 2000 se están desarrollando autoridades tradicionales “porque el policía trae ladrón, el ejército guerra y el subprefecto corrupción”.

¿Seguridad comunal o policía del MIP?

Omasuyos quiere ser el ejemplo de la recién bautizada “seguridad comunitaria”, cueste lo que cueste. Los réditos políticos, contradictorios, pero seguros, están en disputa entre las fuerzas enfrentadas del “Mallku” y Choquehuanca.

Al poder prescindir de los efectivos policiales e instalar un sistema “de acuerdo a sus costumbres”, ambos líderes pretenden introducir el mensaje político a otras provincias.

El primer paso ya estaría dado con el reconocimiento y la vigencia de la justicia comunitaria expresadas a través de las autoridades originarias (mallkus, jilakatas y mamat’allas). El segundo paso apunta a la implantación de una “policía comunitaria” cuyo carácter coercitivo contaría con el total apoyo de las comunidades aledañas a Achacachi, aunque ésta contradiga abiertamente a la Constitución Política del Estado.

Paradójicamente, el único conflicto que preocupa a los líderes del MIP no es exactamente la violación de los preceptos constitucionales, sino los réditos políticos de “la autoría”.

Cómo se pagará a estos efectivos y la opinión del gobierno respecto al gateo de su minirrepública parecen ser temas de poco interés para sus impulsores.

Al “Inca”, quien se autocalifica como el principal impulsor de este proyecto, le interesa asentar al grupo de “seguridad indígena” compuesto por más de treinta jóvenes campesinos destinados a la vigilancia y control de las comunidades en Omasuyos —principalmente el

pueblo de Achacachi—. “Nadie apoyó esto, ni el Alcalde ni Felipe (el ‘Mallku’), lo he impulsado solo, inclusive les doté de uniformes, pero sin resultados”, cuenta el parlamentario campesino. Contrariamente, Felipe Quispe dice que todo responde a su visión y que la implantación de la “seguridad comunitaria” para Omasuyos nació de sus “profundas cavilaciones altiplánicas”.

En la provincia, por cierto, los intereses no van por el mismo lado. El Alcalde de Achacachi confirma el deseo de implantar este sistema, pero el problema presupuestario no da lugar a su realización. “El ‘Mallku’ quería que los sueldos sean pagados por la Alcaldía, y eso no podía ser”, aclara el burgomaestre. Los detractores de la Municipalidad se suman. El oficial mayor, Pedro Callisaya, critica este proyecto expresando que “a iniciativa del ‘Mallku’ se organizó una policía sindical, pero su actitud no era nada buena y la población y las autoridades los descartaron”.

Las delirantes ideas del líder del MIP son contrastadas al toque por los pobladores de Achacachi: “A los únicos a los que se respeta es a ellos (a los policías), a jóvenes sin armas y chiquillos quién los va a respetar”, cuestiona una de las comunarias.

Sin embargo, las dificultades, al parecer, no tienen importancia en los alrededores de Achacachi, donde la aceptación de los comunarios es incondicional. “La reestructuración de esta ‘policía comunitaria’ fundamentada por el control social del pueblo campesino ya es un hecho”, confirma Felipe Quispe.

Junto con este dilema, surgen nuevamente los problemas internos de la provincia. Felipe Quispe sentencia que al final se va a imponer lo que digan los comunarios y no los “ciudadanos” de Achacachi. “Los cívicos son de un partido, inclusive el Alcalde achacacheño es del MBL, y ellos van a tirar por su lado; nosotros debemos hacer respetar lo que decidimos. Si ellos piden policías, igual los vamos a sacar, los vamos a descuartizar, incluso al cuartel (de Ayacucho), que se está salvando hasta ahora, pero con el tiempo igual los vamos a arrasar, por eso deben tener en cuenta esto antes de tomar una decisión (los de Achacachi)”, advierte el “Mallku”.

El nacionalismo indígena

Bloqueos, manifestaciones, represiones, invasiones militares y muertes sellaron en la provincia Omasuyos —principalmente en Achacachi— el calificativo de “Zona Roja”, un lugar donde no se dan las garantías para ejercer la labor policial. El rechazo de la población campesina y sus autoridades, sustentado por sus deseos de autarquía organizativa, han cerrado las puertas a la institución del orden.

Junto con los problemas de 2000, reflataron abiertamente los rumores de asentamientos guerrilleros en la provincia, rumores que los líderes campesinos se ocuparon de alimentar indirectamente, pero que sólo se confirmaron en parte. Los brotes subversivos, de cualquier forma, son mínimos si los comparamos con la ambición manifiesta del MIP en palabras y hechos de declararse autónomos por las buenas o por las malas. ¿No es acaso la “policía india” un mensaje directo al gobierno, la hilacha de la investidura presidencial que el ‘Mallku’ ha empezado a desatar disimuladamente? “Estamos ante la emergencia de una especie de nacionalismo indígena aymara, con su núcleo irradiador en las provincias del norte paceño, y en parte en Aroma y Loayza, que serían las provincias con mayor construcción discursiva y con mayor capacidad organizativa hacia el resto; esta emergencia, sin embargo, es de idas y venidas, lenta y dificultosa”, opina el analista político Álvaro García Linera.

En su criterio, los achacacheños tienen una memoria guerrera de larga data. En este territorio, explica, se ha instaurado con mayor fuerza el katarismo y luego el indianismo. “La zona de Omasuyos, los Andes, Ingavi y la zona de Aroma son como los centros de influencia y de la irradiación indianista-katarista de los 70, y donde también con mayor fuerza se asentaron los cuadros del EGTK; de hecho, ésta es una zona donde hay un fuerte enraizamiento de la ideología indianista y donde se recupera la herencia organizativa y casi bélica guerrera que tienen los aymaras”, afirma.

El cuartel indígena de K'alachaqa

Por su mayor influencia y carácter, Achacachi y sus comunidades aledañas: Chujñak'ala, Ajllata y K'alachaqa, parecen ser los lugares propicios para el asentamiento de movimientos indígenas insurgentes. Sin embargo, el “Mallku” y Choquehuanca lo niegan. Este último, empero, no descarta una hipótesis: “En un país con hambre y miseria, el pueblo se arma y se forman grupos de resistencia por la crisis, si el pueblo se resiste tiene derecho. Yo he sido guerrero aymara y lanzo palabras, en el conflicto se lanzan piedras y flechas. Si el gobierno no atiende los mil tractores gratuitamente, el pueblo se va a levantar”, amenaza el dirigente.

Ahora, los testimonios sobre “entrenamientos” clandestinos continúan hasta la fecha. Chujñak'ala es una de las comunidades más cuestionadas al respecto. “Todos éstos están enseñados, hacen asustar a la gente para que no vaya a la ‘Rinconada’, para que no vean a los grupos entrenando”, afirma un comunario de Huarina. Asimismo, los pobladores del pequeño asentamiento en las faldas del nevado Illampu dicen que fueron objeto de rastillaje y batidas por parte de efectivos militares. “Una noche (durante 2002) vinieron del cuartel Ayacucho, de Chúa, Aviación y la GES buscando armas, pero no encontraron nada”, recuerda uno de los comunarios.

De las sospechas militares y la paranoia policial surge la sombra del cuartel indígena de K'alachaqa. “No era un grupo de guerrilleros ni de encapuchados. Son 40 mil indios aymaras que en septiembre del 2000, junio y julio del 2001 y del 2002 llegan armados con palos, piedras, dinamita y armas con la idea de construir una estructura de autodefensa militar comunitaria frente al Estado”, aclara García.

“El cuartel indígena de K'alachaqa concentra a los achacacheños y a los comunarios de Omasuyos, los Andes, incluso Camacho. Pero, ojo, ésta es una estructura militarizada de comunidades y de ayllus. Creo que ahora seguimos en esa lógica, en un proceso de insurgencia, de autoorganización, de autonomía, incluso policial, asentada en sindicatos, ayllus y federaciones; a eso ahora le llamamos insurgencia”, complementa.

A juicio de Felipe Quispe, por el contrario, este movimiento está muerto. “En K'alachaqa hubo antes un cuartel, pero ahora está acabado, las comunidades sólo lucharán contra el gobierno saliendo a la luz pública con movilizaciones, no como frentes armados”, sostiene el dirigente campesino.

Los habitantes de la provincia, no obstante, sienten la presencia de estos grupos insurgentes. Según doña Petrona, vecina de Warisata, hay grupos armados vigentes en Omasuyos: “Se escucha varias veces disparos en las cumbres, incluso preguntamos al cuartel si ellos son los que disparan, y nos dicen que no”, cuenta.

Don Benjamín, un profesor jubilado de Warisata, relata que esto era más notorio en Ajllata y Chujñak'ala. En esas comunidades, explica, no se respetó al Ejército ni a los tanques, y en diversas ocasiones los comunarios enfundaron las armas robadas de su reclutamiento en el cuartel. Don Benjamín es más preciso todavía: “Hay tres gringos, uno como hippie, ellos

instruyen a los jóvenes y aparecen sólo cuando hay problemas, ellos parece que se van a entrenar a la cumbre, porque se oye a ratos disparos”, denuncia el ex profesor rural. Carlos, un funcionario de la Alcaldía de Achacachi, asegura la existencia de un grupo armado de quince jóvenes adoctrinados desde el conflicto de 2000, jóvenes radicales que se retiraron de Achacachi y al parecer se asentaron en la provincia Camacho.

Pedro Callisaya, oficial mayor de Achacachi, también manifiesta sus dudas: “Comentando con el personal del Ejército, me habían indicado que hay un grupo guerrillero que estaba entrenando al pie de la cordillera, por informes de servicios de inteligencia, más tampoco se supo”.

La seguidilla de testimonios de los pobladores en referencia a los asentamientos subversivos son frenados en seco por el gobierno, que niega tozudamente la existencia de cualquier movimiento guerrillero.

Álvaro García Linera, experto analista, explica la situación con pragmatismo: “No hay movimientos guerrilleros en Omasuyos, existe todo un proceso de insurgencia comunal, donde la idea de autoorganización, desplazamiento de la Policía, son hechos, ante todo, de la insurgencia de comunidades”.

Ciudades de Dios después del credo neoliberal

La mayoría de los países latinoamericanos están atravesados por situaciones de violencia e inseguridad. La sociedad civil desconfía de sus guardianes y apela a la defensa comunitaria y a la presencia policial como forma de prevención. En EE.UU. la situación es despareja: las grandes ciudades tienen una seguridad de la que carecen las ciudades pequeñas y los suburbios de las metrópolis.

Héctor Pavón. DE LA REDACCION DE CLARIN..

Los problemas de seguridad que se viven en la Argentina y sus formas de afrontarlos son hechos que nos acercan cada vez más a la realidad que viven varios países latinoamericanos. No es casual. La situación de pobreza y la implementación de políticas neoliberales ha dejado su trágica estela en todo el continente. La violencia y la inseguridad son las más claras consecuencias de los noventa bajo el Consenso de Washington. A su vez, en Estados Unidos, el delito tiene otras causas y se poseen los medios para trabajar en su prevención, aunque no siempre se logre.

En América latina, cada año, se registra un promedio de 140.000 homicidios; cada ciudadano pierde un promedio de tres días de "vida saludable" a causa de la violencia; 28 millones de familias son víctimas de robo o hurto y la pérdida y destrucción de bienes es equivalente al 14,2 por ciento del PBI de la región. Los datos surgen de Seguridad ciudadana en América latina, una investigación de José María Rico, profesor de Criminología de la Universidad de Montreal, y Laura Chinchilla, ex ministra de Seguridad de Costa Rica.

De esta forma en Chile, el número de denuncias ante la policía tuvo un incremento anual del 3 por ciento entre 1980 y 1991; en Perú, la tasa anual de crecimiento de la criminalidad ha sido del 30 por ciento entre 1992 y 1997 y en México se registran incrementos similares.

Hacia 1998, Latinoamérica presentaba una tasa de victimización superior al 20 por ciento, pero en Guatemala, el Salvador, Venezuela, México y Ecuador la tasa se encontraba entre el 40 y 60 por ciento.

No es casual que en todos estos escenarios prime la desigualdad social, entendida como inequidad en la distribución del ingreso y las oportunidades. Pero éstas no son las únicas características comunes. Por el lado de las fuerzas de seguridad y su credibilidad, se enfrentan con la problemática de que muchos de sus miembros han participado de abusos, torturas y desaparición de personas en épocas de dictaduras militares. Por el lado de la sociedad, ha habido una tendencia hacia la autodefensa: adquisición de armas o perros, instalación de rejas y sistemas de alarmas, contratación de guardias, organización de vecinos y una extensión importante y preocupante de los servicios privados de vigilancia que suelen sobrepasar en número a las policías locales.

Hacia 1997 la policía y la población del estado de San Pablo, Brasil, adoptaron el modelo de policía de orientación comunitaria para prevención y control de la criminalidad. También instrumentaron el programa Escuelas Seguras y los Comités Comunitarios de Seguridad. Hacia 2000 el balance indicaba que se había reducido el número de homicidios y robos y se había logrado un mayor nivel de satisfacción de la población por estas medidas. Sin embargo, se ha criticado al servicio policial como fuertemente militarizado, el escaso número de policías que intervienen en el programa, la falta de colaboración de la comunidad, la poca credibilidad de la policía en la comunidad y un incremento de civiles muertos por la Policía Militar.

En el Distrito Federal de México se ha desarrollado a partir de 1997 la participación ciudadana a través de los comités vecinales y las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública. El Estado y la sociedad civil trabajan para la lucha y prevención del delito. Aunque no han cumplido con todos sus objetivos, hacia el 2002, se había logrado un diagnóstico de situación y se comenzaron a implementar medidas en conjunto entre la sociedad y la policía como el control de lugares donde se vende alcohol, mayor patrullaje, entre otras.

EE.UU., desde donde surgieron varios de los modelos imitados por algunos países latinoamericanos, ha logrado reducir en forma notoria las cifras del crimen en sus grandes ciudades. Entre 1990 y 1999, las tasas delictivas disminuyeron un 26,7 por ciento. La de los delitos violentos contra la persona y la de las infracciones contra la propiedad descendieron en un 28,3 y 26,5 respectivamente. Los robos a mano armada bajaron un 41,6 por ciento y los homicidios 39,4. Fue más notorio en Nueva York donde la tasa de delitos disminuyó un 46,2 por ciento en promedio. Los homicidios descendieron un 67,5 por ciento y los robos con violencia, 54,2.

Se aplicó un programa de policía comunitaria basado en la identificación y solución de problemas junto a la comunidad y en una mayor presencia policial. Luego de dar cifras impactantes de descenso de los niveles de criminalidad, comenzaron a avizorarse problemas de fondo que seguían sin ser resueltos. La delincuencia no ha disminuído en todas las ciudades, y por el contrario hubo incrementos en ciudades pequeñas y en los suburbios de las grandes metrópolis. Otro problema que quedó sin resolver es la inquietante presencia de armas y drogas en la población, sobre todo entre los jóvenes. Rico y

Chinchilla advierten sobre el próximo escenario estadounidense: "la población de entre 15 y 21 años se está incrementando de nuevo; se prevé una nueva generación de niños nacidos de madres adictas al crack y tres jóvenes negros de cada cinco de quince años habrán nacido de madres solteras. Por ello la policía espera para dicha época una ola de "super delincuentes" adictos a drogas, privados de disciplina paterna y fuertemente armados".